

EXP: 2022-00527 - SIERRACOL: Contestación de la demanda y otros

Juliana Romero Liévano <jromero@gomezpinzon.com>

Mar 16/05/2023 4:28 PM

Para: Juzgado 02 Administrativo - Arauca - Arauca <jadmin02arc@notificacionesrj.gov.co>;Juzgado 02 Administrativo - Arauca - Arauca <j2adarau@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Juzgado 02 Administrativo - Arauca - Arauca <jadmin02arc@notificacionesrj.gov.co>;Proc. I Judicial Administrativa 64 <procjudadm64@procuraduria.gov.co>;jbetancourt@procuraduria.gov.co <jbetancourt@procuraduria.gov.co>;Cesar Julio Betancourt Rincon <cjbetancourt@procuraduria.gov.co>;notificacionesjudiciales@unisaludarauca.gov.co <notificacionesjudiciales@unisaludarauca.gov.co>;gubernacionaraucaajuridico@gmail.com <gubernacionaraucaajuridico@gmail.com>;oficinajuridica@arauca.gov.co <oficinajuridica@arauca.gov.co>;Galeano, Wendy <bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com>;notificacionesjudiciales.fms.co@sodexo.com <notificacionesjudiciales.fms.co@sodexo.com>;laura.victoria.celis@hotmail.com <laura.victoria.celis@hotmail.com>;Acevedo, Juan Fernando <JuanFernando_Acevedo@sierracol.com>;notificacionesjudiciales@axacolpatria.com <notificacionesjudiciales@axacolpatria.com>;aristizabal@pro-legal.co <aristizabal@pro-legal.co>;Lasso, Nicolas <Nicolas_Lasso@sierracol.com>;Juan Carlos Díaz Figueroa <jcdiaz@gomezpinzon.com>

📎 5 archivos adjuntos (3 MB)

SIERRACOL - Contestación de la demanda.pdf; SIERRACOL- Solicitud sentencia anticipada.pdf; SIERRACOL - Sustitución de poder DRA a JOT.pdf; SIERRACOL - Llamamiento en garantía AXA COLPATRIA.pdf; SIERRACOL - Llamamiento en garantía SODEXO.pdf;

Señores

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA

Al correo electrónico: j2adarau@cendoj.ramajudicial.gov.co_

Referencia: Reparación directa de **JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA y OTROS** contra **UAESA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, OCCIDENTAL DE COLOMBIA (SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC) y SODEXO S.A.**

Expediente: 81-001-33-33-002-2022-00527-00

Asunto: Contestación de la demanda, solicitud de sentencia anticipada, llamamientos en garantía a AXA COLPATRIA y SODEXO.

Con la anuencia del apoderado sustituto de **SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC**, el **Dr. JUAN GUILLERMO OTERO GONZÁLEZ**, a quien copio en el presente correo, autorizado por el inciso segundo del artículo 109 del Código General del Proceso (en consonancia con el Art. 122 del mismo estatuto procesal) y la ley 2213 de 2002, presento oportunamente los siguientes escritos dentro del proceso de la referencia:

- 1. Contestación de la demanda
- 2. Solicitud de sentencia anticipada
- 3. Llamamiento en garantía a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A
- 4. Llamamiento en garantía a SODEXO S.AS

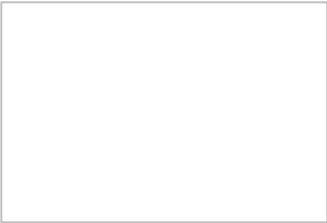
Todos los documentos contienen sus links de acceso a una carpeta de One Drive donde se encuentran las pruebas respectivas. A dichos links, solamente tienen acceso las partes respectivas del proceso. Sin embargo, en aras de evitar inconvenientes, en el siguiente link podrán encontrar todas las pruebas de los escritos enunciados: [2022-00527 - Reparación directa - Sierracol](#)

Agradecemos la confirmación del acuso de recibo de este correo y del acceso al link de One Drive.

Agradezco la atención prestada,

Atentamente,

Juliana Romero Liévano
Asociada / Associate
jromero@gomezpinzon.com
www.gomezpinzon.com
Calle 67 # 7-35 Of. 1204
Bogotá - Colombia
Tel.: (57601) 3192900 Ext.
Directo:



CONFIDENTIAL NOTE: The information in this E-mail is intended to be confidential and only for use of the individual or entity to whom it is addressed. If you are not the intended recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and sanctioned by law. If you receive this message in error, please immediately send it back and delete the message received.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

Señores

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA

Al correo electrónico: j2adarau@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Reparación directa de **JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA y OTROS** contra **UAESA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, OCCIDENTAL DE COLOMBIA (SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC) y SODEXO S.A.**

Expediente: 81-001-33-33-002-2022-00527-00

Asunto: Contestación de la demanda

JUAN GUILLERMO OTERO GONZÁLEZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de apoderado sustituto de la sociedad **SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC** (en adelante “SIERRACOL” o la “Demandada”), mediante el presente escrito contesto la demanda de reparación directa presentada por **JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA y OTROS** (en adelante los “Demandantes”) en los siguientes términos:

I. OPORTUNIDAD

Este escrito de contestación es presentado dentro de la oportunidad procesal establecida en los artículos 172 y 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante “CPACA”). El auto admisorio de la demanda de **JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA y OTROS** (en adelante los “Demandantes”) fue notificado personalmente a SIERRACOL el 23 de marzo de 2023. En consecuencia, el término de treinta días hábiles otorgado por este Despacho para contestar la demanda empezó a contar a partir del 28 de marzo de 2023 y vence el 16 de mayo de 2023, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 199 del CPACA y en el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

I. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Mi mandante se opone a todas y cada una de las pretensiones formuladas por los Demandantes **JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA y OTROS**. Las razones de la oposición a cada una de las pretensiones de la demanda se manifiestan de forma expresa en el presente acápite, sin perjuicio de las motivaciones y oposiciones que de manera expresa y detallada serán abordadas a lo largo de este escrito, especialmente en la contestación a los hechos y a través de la formulación de excepciones de fondo.

A la pretensión PRIMERA: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por cuanto a SIERRACOL no le es imputable responsabilidad alguna por los supuestos daños ocasionados por una supuesta falta de prevención e irregular aplicación de los protocolos de emergencia frente al COVID-19. Además, SIERRACOL no puede ser sujeto de responsabilidad administrativa como la pretendida por los Demandantes, pues es una organización privada dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos, y para el momento de los hechos no se encontraba desempeñando funciones administrativas.

A la pretensión SEGUNDA: Esta pretensión está acumulada de manera de indebida y antitécnica, pues contiene varias pretensiones que debieron formularse por separado en una sola pretensión. No obstante, lo anterior, en ejercicio de mi derecho de defensa, me opongo de manera expresa a la prosperidad de esta pretensión en toda su extensión por las razones que a continuación indico.

Teniendo en cuenta que no hay lugar a acceder a las declaraciones de la pretensión PRIMERA me opongo a que se condene a SIERRACOL por los presuntos perjuicios que alegan haber padecido los Demandantes relacionados en las “*sub-pretensiones*” denominadas “PERJUICIOS MORALES”, “DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS” Y “PERJUICIOS MATERIALES” de la Pretensión objetada. En todo caso, los Demandantes deberán probar debidamente todos los elementos de los daños alegados pues de lo contrario los perjuicios solicitados en esta pretensión deberán estar condenados al fracaso.

Pese a la falta de claridad sobre la discriminación de la pretensión SEGUNDA, para mayor ilustración del Despacho me pronuncio sobre cada uno de los conceptos indebidamente acumulados en dicha pretensión.

- 2.1. Sobre la “*sub-pretensión*” denominada “**PERJUICIOS MORALES**”: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por infundada pues los Demandantes no acreditan los elementos propios que constituyen un perjuicio moral, la prueba de la causación de los mismos, la calidad de “víctima” del señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA, ni su dependencia económica de la “víctima”. Es más, los Demandantes no logran individualizar, sustentar, ni probar de forma alguna los daños que reclaman.

- 2.2. Sobre la “*sub-pretensión*” denominada “**DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS**”. Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por infundada, pues los Demandantes no acreditan los elementos propios que constituyen la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la prueba de la causación de los mismos, la calidad de “víctima” del señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA, ni su dependencia económica de la “víctima”. Es más, los Demandantes no logran individualizar, sustentar, ni probar de forma alguna los daños que reclaman.

- 2.3. Sobre la “*sub-pretensión*” denominada “**PERJUCIOS MATERIALES**”: Me opongo a la prosperidad de esta pretensión por cuanto los Demandantes no aportan soporte alguno que permita corroborar la certeza de los daños materiales que alegan, de tal forma que se puedan apreciar material y jurídicamente. Además, los Demandantes no acreditan que los daños que supuestamente se les causaron son directos y que, por lo tanto, guardan relación con alguna conducta antijurídica de mi mandante.

A la pretensión TERCERA (indebidamente numerada como SEGUNDA por los Demandantes): Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que, teniendo en cuenta que no procede condenar a SIERRACOL por ninguna de las sumas pretendidas por los

Demandantes, tampoco resulta viable que se condene a mi mandante a la actualización de la condena y el reconocimiento del pago de intereses legales.

A la pretensión CUARTA (indebidamente numerada como TERCERA por los Demandantes): Me opongo a la prosperidad de esta pretensión pues, teniendo en cuenta que no procede condenar a SIERRACOL por ninguna de las sumas pretendidas por los Demandantes, tampoco resulta viable que se ordene a SIERRACOL que dé cumplimiento a la respectiva sentencia en los términos del Art.192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la pretensión QUINTA (indebidamente numerada como CUARTA por los Demandantes): Me opongo a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que, teniendo en cuenta que no procede condenar a SIERRACOL por ninguna de las sumas pretendidas por los Demandantes, tampoco hay lugar a que se condene el pago de intereses de conformidad con el Art.1635 del Código Civil.

A la pretensión SEXTA (indebidamente numerada como QUINTA por los Demandantes): Me opongo a la prosperidad de esta pretensión pues serán los Demandante quienes como parte vencida deberán ser condenado al pago de las costas y agencias en derecho que se causen dentro del proceso.

II. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS

Antes de dar contestación a cada uno de los hechos planteados por el Demandante, es necesario resaltar que varios de los hechos de la demanda, tal y como han sido planteados por el Demandante, no cumplen con los requisitos establecidos en el numeral tercero del artículo 162 del CPACA. No obstante lo anterior, a continuación, daré contestación a cada uno de ellos, así:

Al hecho PRIMERO. Pongo de presente al Despacho que la redacción del hecho como está planteado arroja dudas frente al contenido de este. Puntualmente, los Demandantes no precisan las circunstancias de tiempo concretas de las expresiones “*para la época de 2020, mes de mayo*” y “*la época de los hechos bajo examine*”. ¿Cuál es el periodo en cuestión al que se refieren los Demandantes en este hecho? Resalto la imposibilidad de ejercer el derecho de defensa de mi mandante frente a un hecho cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar no han sido definidas por los Demandantes. No obstante, para efectos de claridad y conocimiento del Despacho, me pronuncio de manera separada frente a cada uno de los hechos planteados de la siguiente manera:

- (i) Es cierto, y de conocimiento común, que para el mes de mayo de 2020 nos encontrábamos dentro de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, causada por la pandemia del COVID-19.
- (ii) Es cierto que en el marco de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, las actividades concernientes a la industria del petróleo, como las que desarrollaba y desarrolla SIERRACOL, se encontraban dentro de las actividades exceptuadas a la orden de aislamiento preventivo decretada por el Gobierno Nacional. Lo anterior, tal como lo establece el artículo 3 del Decreto 593 del 2020, a cuyo contenido me remito en su literalidad.

Además, informo al Despacho que SIERRACOL, en cumplimiento de las disposiciones legales que no solo le permitían, sino que obligaban a mantener la continuidad de sus actividades, dada su naturaleza esencial y de vital importancia para el país, adoptó los protocolos y medidas de seguridad necesarios para evitar el contagio y la propagación del virus del Covid-19.

- (iii) Es cierto que para el mes de mayo de 2020 regía el Decreto 593 de 2020. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de claridad sobre las circunstancias de tiempo de la expresión *“la época de los hechos bajo examine”*, preciso al Despacho que el Decreto 593 de 2020 solamente rigió a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 6 de mayo de 2020, fecha en la cual fue derogado por el Decreto 636 de 2020.

Al hecho SEGUNDO. No es un hecho de mi mandante por lo que no estoy obligado a pronunciarme al respecto. Sin embargo, manifiesto al Despacho que la auto calificación del Demandante como “víctima” es una apreciación subjetiva del Demandante. Tampoco puedo pronunciarme sobre los servicios que el Demandante alega prestaban a *“las empresas de petróleo que movilizaban a sus trabajadores.”* No es claro a qué servicios se refiere el Demandante ni cuándo ni a quién fueron prestados, por lo que no me es posible pronunciarme al respecto. En todo caso manifiesto que ni el HOTEL CIMA REAL ni el señor Juan Alberto Alvarez Quezada, prestan o han prestado servicio alguno a mi representada.

Al hecho TERCERO. Contiene varios hechos ajenos a mi mandante y sobre los cuales no estoy obligado a pronunciarme. Sin embargo, resalto la dificultad de ejercer el derecho de defensa de mi mandante frente a los hechos como han sido planteados. ¿Cuál es el periodo en cuestión? ¿Se refiere el Demandante a servicios de hospedaje prestados por el Hotel Cima Real? No obstante, para mayor claridad y conocimiento del Despacho, me pronuncio de manera separada frente a cada hecho de la siguiente manera:

- (i) Es cierto que los trabajadores de la empresa contratista SODEXO se dirigían al complejo petrolero Caño Limón para prestar sus servicios. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el contrato No. CW2234430 suscrito entre SIERRACOL y SODEXO, el cual tenía un vigencia de 3 años, contados a partir de la fecha de inicio de actividades el 16 de enero de 2020 hasta el 16 de enero de 2023.
- (ii) No le consta a mi mandante el número de trabajadores de SODEXO que se dirigían al complejo petrolero Caño Limón y que se hospedaron en el Hotel Cima Real. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

Al hecho CUARTO. Por contener distintos hechos que además son independientes entre sí y están debidamente acumulados en uno solo, lo contesto como sigue:

- (i) Es cierto que el servicio hotelero solo podía ejercerse en pro de la contención, prevención y mitigación del Covid-19, tal y como lo indicaban las normas que para el efecto dictó el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. Sin embargo, preciso a este Despacho que el objeto social de mi representada no se relaciona con la prestación de los servicios hoteleros, por lo cual este hecho excede la esfera de conocimiento de mi mandante.

- (ii) No le consta a mi mandante que la “contención, prevención y mitigación del Covid-19” fuera el propósito del servicio prestado por el señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA y el HOTEL CIMA REAL, “conforme a las necesidades logísticas de la actividad petrolera cobijada por el decreto en vigencia”. Esto es un hecho ajeno a SIERRACOL que deben probar los Demandantes y que no estoy obligado a responder, por lo que me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- (iii) No es un hecho en la medida que no narra una situación fáctica particular, debidamente determinada, sino son simples transcripciones de disposiciones legales del Decreto 592 de 2020. Sin embargo, por tratarse de normas jurídicas me remito estrictamente a su contenido y no a las transcripciones parciales que realizan los Demandantes.

Al hecho QUINTO: Al no ser un hecho de mi mandante, no estoy obligado a pronunciarme al respecto. Aun así, me pronuncio de manera separada frente a cada hecho de la siguiente manera:

- (i) No le consta a mi mandante el número de trabajadores de SODEXO que se dirigían al complejo petrolero Caño Limón y que se hospedaron en el Hotel Cima Real. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.
- (ii) No le consta a mi mandante que para mayo de 2020 se alojaron en el Hotel Cima Real personal del hotel, un trabajador contratado para la limpieza de la piscina y el señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA. Dichos huéspedes no ostentaban, ni ostentan la condición de trabajadores de SIERRACOL. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

Al hecho SEXTO. Aunque la redacción de este hecho como está planteada arroja dudas frente al contenido del mismo, si los Demandantes se refieren a determinaciones tomadas por SODEXO para prevenir la propagación del Covid-19, corresponderá a SODEXO pronunciarse y no a mi mandante. No obstante, lo anterior, para efectos de claridad le informo al Despacho lo siguiente:

- (i) No es cierto que conforme las necesidades logísticas de SODEXO se determinó que, para la prevención de la propagación del Coronavirus Covid-19, los trabajadores que ingresaran al campo petrolero debían aislarse de manera preventiva. En efecto, fue el mismo Gobierno Nacional quien, a partir de la expedición del Decreto 457 de marzo de 2020 ordenó el primer aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes dentro del territorio nacional, con una duración inicial de 19 días, desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020. Posteriormente la medida de aislamiento preventivo fue extendida hasta el 1 de julio de 2020, prorrogándose su vigencia a través de la expedición de diversos decretos que relaciono a continuación.

DECRETO AISLAMIENTO PREVENTIVO	FECHA AISLAMIENTO
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020	25 de marzo al 13 al abril de 2020
Decreto 531 del 8 de abril de 2020	13 de abril de 2020 al 27 de abril de 2020

Decreto 593 del 24 de abril de 2020	27 de abril de 2020 al 11 de mayo de 2020
Decreto 636 del 6 de mayo de 2020	11 de mayo de 2020 al 25 de mayo de 2020
Decreto 689 del 22 de mayo de 2020	23 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020
Decreto 749 del 28 de mayo de 2020	1 de junio de 2022 hasta el 1 julio de 2020

A partir de julio de 2020, el Gobierno Nacional empezó a implementar una estrategia de reapertura gradual y responsable de la economía y la sociedad, denominada *"Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable"*. Esto implicó la emisión de decretos y resoluciones adicionales que flexibilizaban algunas restricciones y establecían protocolos de bioseguridad para diferentes sectores económicos y sociales.

Ahora bien, preciso al Despacho que SIERRACOL, en cumplimiento de las disposiciones legales y órdenes del Gobierno Nacional, construyó e implementó los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores. Protocolos que fueron permanentemente sujetos a verificación y mejora continua, actualizados conforme los dinámicos entornos regulatorios y buscando proteger a todos los trabajadores de las operaciones de SIERRACOL.

Sin embargo, no nos consta que el Hotel Cima Real desarrollara o implementara los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar el contagio y la propagación del virus del Covid-19 entre las personas que allí se alojaran, conforme las regulaciones que al respecto expidió el Gobierno Nacional y las diversas autoridades nacionales, tales como los Decretos 457 y 749 de 2020, las Resoluciones 380,285 y 666 de 2020, la Circular 022 de 2020, entre otros.

- (i) No es cierto que la toma de muestras de los trabajadores de SODEXO que iban a ingresar al campo petrolero Caño Limón se realizó en el lugar de origen de cada uno de ellos. Por el contrario, teniendo en cuenta que solamente con la expedición del Decreto 048 del 11 de mayo 2020 la Gobernación de Arauca estableció la obligación de llevar a cabo pruebas PCR para ingresar al Departamento de Arauca, SIERRACOL, actuando más allá de sus obligaciones, programó y realizó las pruebas a sus trabajadores y contratistas, directamente en el Departamento de Arauca.

En efecto, dando estricto cumplimiento a las disposiciones legales que regulaban el contenido de los protocolos de bioseguridad, y puntualmente a la Resolución 666 de 2020, SIERRACOL tomó las medidas necesarias para garantizar un ambiente de trabajo seguro y evitar el contagio y la propagación del virus del Covid-19 dentro de los campos asociados a sus operaciones.

Una de las medidas más importantes que implementó mi mandante, desde mediados de **abril de 2020**, fue la realización de pruebas moleculares para detectar el virus del Covid-19 al 100% de los trabajadores y contratistas que pretendían ingresar a los campos petroleros de las operaciones de SIERRACOL en Arauca, pese a las

limitaciones de disponibilidad de pruebas que existían en el territorio nacional. Es decir, prácticamente un mes antes de entrar en vigencia el Decreto 048 del 11 de mayo de 2020¹, expedido por la Gobernación de Arauca, SIERRACOL contrató el servicio para la realización de las pruebas Covid-19 en el **Departamento de Arauca.**

Además, teniendo en cuenta que para la época no era obligatorio que se realizaran las pruebas moleculares para la detección del Covid-19 en el lugar de origen, las mismas fueron programadas y realizadas en el **Departamento de Arauca** y posteriormente remitidas a la ciudad de Bogotá para su procesamiento en el laboratorio Colcan, donde contaban con el equipo especializado para detectar el virus y emitir un resultado en el menor tiempo posible

Al hecho SEPTIMO. No es un hecho sino apreciaciones subjetivas de los Demandantes sobre las razones por las cuales, en su criterio, estaban prestando los servicios de hospedaje en el Hotel Cima Real. Es más, a mi mandante tampoco le consta el objeto por el cual el señor JUAN ALBERTO ÁLVAREZ QUEZADA estaba prestando los servicios de hospedaje, pues excede completamente la esfera de su conocimiento. Aun así, pongo de presente al Despacho que en el marco de la pandemia causada por el Covid-19 el Gobierno Nacional ordenó que las actividades de la industria hotelera solo podían desarrollarse para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria causada por el virus, conforme lo establecido inicialmente en el Decreto 457 de 2020 y los decretos que prorrogaron la vigencia del aislamiento preventivo en el territorio nacional.

En este orden de ideas, aquellos hoteles, hostales y hospedajes que prestaran sus servicios para el aislamiento preventivo de sus huéspedes, debían ser autorizados e identificados en cumplimiento de las Resoluciones 380 y 385 de 2020 o a través de las autoridades sanitarias correspondientes, comprometiéndose a desarrollar e implementar los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar el contagio y propagación del virus del Covid-19. No obstante, a mi mandante no le consta que el Hotel Cima Real tuviera las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades o que adoptara los protocolos y medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y bienestar de sus huéspedes.

Al hecho OCTAVO: Al no ser un hecho de mi mandante, no estoy obligado a pronunciarme al respecto. Sin embargo, preciso al Despacho que a mi mandante no le constan los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud el 21 de marzo de 2020, por cuanto mi mandante es una sociedad diferente a dichas entidades. Tal como lo indican los Demandantes, dichos lineamientos fueron emitidos para hacer frente al Covid-19 únicamente para el manejo del aislamiento en hoteles, hostales u hospedajes, actividades que no corresponden al objeto social de SIERRACOL. Por lo tanto, me atengo a lo que se pruebe en el proceso y me remito estrictamente a su contenido original.

Además, preciso a este Despacho que eran los mismos Demandantes quienes estaban obligados a cumplir dichos lineamientos pues, como lo afirman en el hecho SEGUNDO, dentro de la industria hotelera se encontraban *“las actividades del señor JUAN ALBERTO ÁLVAREZ*

¹ Por medio del cual la Gobernación de Arauca estableció la obligación de llevar a cabo pruebas de PCR a las personas que pretendían ingresar al Departamento de Arauca.

QUEZADA en calidad de víctima y representante legal del HOTEL CIMA REAL”. Sin embargo, los Demandantes no han acreditado en debida forma que en el Hotel Cima Real hayan actuado diligentemente ni que se hayan empeñado en implementar todas las medidas de bioseguridad tendientes a cumplir con la normativa expedida por el Gobierno Nacional y las autoridades competentes en el marco de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.

Al hecho NOVENO: Contiene varios hechos que en nada involucran a mi mandante por lo que no estoy obligado a pronunciarme al respecto. Aun así, me pronuncio de manera separada frente a cada hecho de la siguiente manera:

- (i) No le consta a SIERRACOL, ni tenemos conocimiento, que para mayo de 2020 el señor Juan Álvarez se encontraba en cumplimiento de un contrato con SODEXO, ni las condiciones bajo las cuales fue suscrito. Además, de la revisión que se hizo del expediente se advierte que dicho contrato NO fue aportado como prueba con la demanda.

- (ii) Es cierto que la empresa contratista SODEXO requería del servicio de hospedaje para sus trabajadores a fin de que cumplieran con un aislamiento preventivo para posteriormente ingresar al complejo petrolero Caño Limón, en concordancia con las órdenes del Gobierno Nacional y los protocolos de bioseguridad. Lo anterior no fue más que una medida tomada para evitar el contagio y propagación del virus del Covid-19 entre el personal que pretendía ingresar a los Campos petroleros de las operaciones de SIERRACOL en Arauca, en cumplimiento de las órdenes del Gobierno Nacional y los protocolos de bioseguridad desarrollados e implementados por mi mandante. Estos protocolos fueron permanentemente actualizados y armonizados con aquellos de las empresas contratistas de SIERRACOL como empleadoras del personal que prestaba sus servicios en los campos petroleros.

Al hecho DECIMO: La redacción confusa y escueta de este hecho no permite ejercer el derecho de defensa que le asiste a mi mandante de forma correcta. Aun así, por tratarse de un tema que interesa al proceso, procedo a responder de manera separada frente a cada una de las afirmaciones contenidas en el hecho planteado:

- (i) No es un hecho de mi mandante y no me consta que dentro de las personas hospedadas en el Hotel Cima Real se encontraba un individuo que no se reportó como caso para el departamento de Arauca, sino para Santander. Sin embargo, preciso nuevamente al Despacho que SIERRACOL construyó e implementó todos los protocolos de bioseguridad necesarios para garantizar la seguridad de todas las personas que ingresaran al campo petrolero Caño Limón, ajustándolos y mejorándolos permanentemente conforme a los dinámicos entornos regulatorios y al avance propio del virus del Covid-19. Dichos protocolos cubrían los diferentes aspectos de la operación, como el comportamiento cotidiano en los sitios de trabajo, el ingreso y permanencia en el área industrial, el cambio de turno, el manejo de casos sospechosos, el diagnóstico, entre otros.

- (ii) No es cierto que porque no se cumplió con las pruebas de rigor a los trabajadores de SODEXO antes de trasladarse al municipio de Arauca es que uno de ellos se reportó como un caso de Coronavirus en el departamento de Santander. Por el contrario, en ningún caso pude endilgarse a mi mandante responsabilidad alguna por el resultado positivo de Covid-19 de un trabajador de la empresa contratista SODEXO, quien ni siquiera alcanzó a ingresar al campo petrolero para la prestación de sus servicios, cuando fue SIERRACOL misma quien adoptó diligentemente todas las medidas a su alcance, incluso más allá de los lineamientos legales, para evitar el contagio y propagación del Coronavirus.

Es más, este Despacho no puede perder de vista que solamente a partir de la expedición del Decreto 048 de 2020 proferido el 11 de mayo del mismo año, la Gobernación de Arauca estableció la obligación de llevar a cabo pruebas de PCR a las personas que pretendían ingresar al Departamento de Arauca. Es decir, antes del 11 de mayo de 2020, antes de que se verificara el contagio que da lugar a este caso, SIERRACOL no tenía la obligación de realizar a su personal pruebas moleculares para la detección del Covid-19 para ingresar al Departamento de Arauca, ni para circular en ninguna parte del país, pues esto aún no había sido exigido por el Gobierno Nacional.

No obstante, como se mencionó anteriormente, SIERRACOL, actuando más allá del simple cumplimiento de las normas, desde mediados del mes de abril de 2020 implementó para sus operaciones la realización de pruebas moleculares para detectar el virus del Covid-19, antes de ingresar a las instalaciones del complejo petrolero. Las pruebas se hacían al 100% de sus trabajadores directos y de sus contratistas. La característica de las pruebas que realizaba SIERRACOL con el laboratorio Colcan era que, a diferencia de lo que ocurría en la gran mayoría de regiones del país, se practicaba a personas asintomáticas, lo que minimizaba significativamente la posibilidad de su contagio y se entregaba en el menor tiempo posible.

Por lo tanto, dentro de los protocolos marco de mi mandante, en el “*Protocolo de Cambio de Turno*”, se establecieron las medidas generales que debían cumplirse tanto por parte de los trabajadores de SIERRACOL, como por parte de los contratistas y sus trabajadores para el ingreso y salida de turno en el campo petrolero. En dicho protocolo se consagró la aplicación de las pruebas de detección de Covid-19 a los trabajadores directos y de empresas contratistas que pretendían ingresar a las instalaciones de la operación en los Llanos Norte, Caño Limón y Caricare.

Además, es importante resaltar que SIERRACOL exigía a sus contratistas que tuvieran los respectivos protocolos de bioseguridad, debidamente actualizados, que contuvieran medidas estrictas para los cambios de turnos y llevándose a cabo el respectivo seguimiento para garantizar la correcta implementación de los protocolos.

Al hecho DECIMO PRIMERO: No es un hecho. Se trata simplemente de una relación de las personas que se alojaron en el Hotel Cima Real, que no describe circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que no tiene sustento probatorio alguno. Me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

Al hecho DECIMO SEGUNDO: No es un hecho. Es una conclusión o alegato jurídico subjetivo sobre las razones, por demás equivocadas, que llevaron a los Demandantes a interponer la demanda. Además, pongo de presente al Despacho que la redacción de este hecho como está planteado no permite determinar de manera clara y precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los daños que los Demandantes alegan les fueron supuestamente causados. ¿Quién causo los daños? ¿Cuáles fueron los daños? ¿Cómo se encuentran probados dichos daños?

Aun así, vale la pena precisarle al Despacho que, como bien lo afirman los Demandantes en este hecho, fue la UAESA quien tomó la decisión y quien desplegó la conducta de fumigar las áreas del Hotel Cima Real como medida de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19, luego de que uno de los trabajadores de SODEXO fuera reportado como caso positivo del virus. Por lo tanto, ninguna responsabilidad puede endilgarse a mi mandante por los daños en los muebles y enseres del Hotel Cima Real que fueron causados por la fumigación realizada por la UAESA, ni mucho menos por las amenazas e insultos por parte de la comunidad del Departamento de Arauca. En consecuencia, el Despacho deberá dar a este hecho el alcance de confesión en los términos de los Artículos 191 y 193 del Código General del Proceso.

Al hecho DECIMO TERCERO: No es un hecho. Son afirmaciones subjetivas de los Demandantes, de lo que consideran son las razones por las cuales la señora JENIFER TINEO ROJAS, JUANA VICTORIA ALVAREZ TINEO, MARIANGEL MESA TINEO y CRISTIAN CAMILO ALVAREZ FLOREZ se encuentran legitimados para reclamar los supuestos perjuicios morales que se les causaron por *“el aislamiento de su señor padre y compañero permanente, así como la afectación al buen nombre de su medio económico de subsistencia”*. Además, dicho hecho no solo no describe ninguna circunstancia de tiempo modo y lugar, sino que, además, contiene meras afirmaciones carentes de pruebas y sustentos fácticos que no exceden la esfera de la especulación.

Al hecho DECIMO CUARTO: No es cierto como está presentado. Si bien el 19 de septiembre de 2022 se celebró la audiencia de conciliación extrajudicial en la modalidad “no presencial” entre los Demandantes y los Demandados, tal como lo indica la misma acta aportada por los Demandantes, la razón por la cual se declaró fallida la etapa conciliatoria extrajudicial fue porque no existió ánimo conciliatorio entre **las partes**, y no por falta de ánimo conciliatorio únicamente de los Demandados

III. EXCEPCIONES DE MÉRITO Y ARGUMENTOS DE DEFENSA

A continuación, expongo las excepciones de mérito y argumentos de defensa que frustran las pretensiones de los Demandantes.

1. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACION DIRECTA

Es preciso advertir de entrada al Despacho que la acción que los Demandantes pretenden ejercer a través de la demanda se encuentra caducada. Por lo tanto, sus pretensiones deben ser despachadas desfavorablemente.

Sin que haya necesidad de entrar a analizar el fondo del asunto, se evidencia sin dificultad que, frente al medio de control de reparación directa ejercido por los Demandantes operó la caducidad, lo que imposibilita el estudio respectivo en sede judicial.

Con respecto a la figura de la caducidad en procesos tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado tiene definido que se trata de un término imperativo y preclusivo, fuera del cual no es posible someter conflictos al conocimiento de los jueces competentes. Ha dicho concretamente:

“La caducidad es la sanción consagrada en la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en el principio de preclusión que rige todo proceso judicial, en la medida en que el acceder a la jurisdicción encuentra un límite temporal, frente a las situaciones particulares consagradas en la norma que determina ese lapso, es decir, se establece una oportunidad, para que en uso de ella, se promuevan litigios, so pena de fenecer la misma y con ella la posibilidad de tramitar una demanda judicial y llevarla a buen término. Asimismo, se fundamenta en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente, tornándose en ininterrumpidas. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de un medio de control y, con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del estado, a efectos de que el respectivo litigio o controversia sea resuelto con carácter definitivo por un juez de la república con competencia para ello”.²

Pues bien, el término de caducidad del medio de control de reparación directa ejercido por la Demandante está establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, concretamente, en el literal i) del numeral 2°, en los siguientes términos:

“i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”

En consecuencia, el término para interponer la demanda vencía el **1 de julio de 2022**, plazo que no fue cumplido por los Demandantes, pues presentaron su demanda de manera extemporánea el pasado **20 de septiembre de 2022**.

2. NO ACREDITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Como abordaré a continuación, en el caso que nos convoca no se encuentran acreditados todos los elementos cardinales constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual que puedan llevar al Despacho a concluir que SIERRACOL es extracontractualmente responsable por los hechos alegados por los Demandantes. Es por ello que las pretensiones incoadas por la parte actora no tienen vocación de prosperidad.

La doctrina y la jurisprudencia nacional han sido pacíficas al sostener que para que se configure la responsabilidad civil extracontractual, tienen que concurrir todos los elementos determinados para su prosperidad, los cuales no se configuran el presente caso.

² Consejo de Estado. Sentencia del 12 de agosto de 2014. CP: Enrique Gilberto.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que para la prosperidad de las pretensiones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual deben encontrarse acreditados en el proceso todos y cada uno de los siguientes elementos:

- (i) Un daño o lesión antijurídico.
- (ii) Que la acción u omisión tenga un título de imputación.
- (iii) Un nexo de causalidad.

En este caso es claro que no se cumple ninguno de estos presupuestos pues:

- (i) El daño o perjuicio que dicen los Demandantes se les causó simplemente fue mencionado en los hechos de la demanda, más no ha sido debidamente acreditado dentro del proceso. Además, no cumple con la condición de ser cierto y directo, y mucho menos de ser antijurídico.
- (ii) A las conductas de SIERRACOL no se les puede inferir ningún título jurídico de imputación, pues no se está ante ninguna de las modalidades de responsabilidad - objetiva y subjetiva – establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, SIERRACOL, al no ser una entidad del Estado sino una empresa privada, no se encuentra sujeta estos títulos de imputación.
- (iii) No existe un nexo de causalidad entre el daño supuestamente sufrido por los Demandantes y las conductas erradamente endilgadas a SIERRACOL pues el daño no se originó en una acción u omisión imputable a SIERRACOL.

Así las cosas, sin la acreditación de todos y cada uno de los elementos anteriormente reseñados (daño, imputación y nexo de causalidad) no se puede endilgar la responsabilidad pretendida a mi mandante. En otras palabras, desvirtuar el cumplimiento de uno solo de los elementos es suficiente para desvirtuar la figura de la responsabilidad como un todo.

3. INEXISTENCIA DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LA DEMANDANTE Y SU CARÁCTER CIERTO Y DIRECTO.

Teniendo en cuenta lo anterior, los pedimentos de los Demandantes están llamados al fracaso debido a que, uno de los presupuestos axiológicos fundamentales de la responsabilidad civil extracontractual no se encuentra debidamente acreditado, esto es, la existencia de un daño indemnizable por parte de SIERRACOL.

En efecto, como lo ha sostenido de forma reiterada la jurisprudencia nacional, como elemento estructural de la responsabilidad civil extracontractual, el daño es *“todo detrimento, menoscabo o deterioro, que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con su esfera espiritual o afectiva, o con los bienes de su personalidad”*. Además, es el requisito *“más importante (...), al punto que, sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna”*³

Ahora bien, para que sea susceptible de reparación, el demandante debe demostrar la efectiva configuración de una lesión a su patrimonio y que, el daño, cumple con las característica de ser directo y cierto esto es, *“que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y*

³ Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC 5025- 2020 del 14 de diciembre de 2020. Exp: 23660-3-03-001-2009-00004-01.

efectivamente causado”⁴, pues de lo contrario, y sin perjuicio de la existencia de egresos incurridos por la demandante, estos no podrán serle trasladados al demandado.

Al respecto jurisprudencia de las Altas Cortes y la doctrina han establecido de forma reiterada y pacífica que el daño debe ser *cierto* “es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas” -, *determinado o determinable*” y directo, es decir que tenga su causa raíz en una conducta antijurídica atribuible al demandado.

Al respecto el Consejo de Estado ha establecido que:

“[L]a sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño, no resulta suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida en que es necesario e indispensable que el demandante respalde tales afirmaciones con el material probatorio suficiente para su comprobación en el proceso. Se recuerda que, de conformidad con el régimen de responsabilidad vigente, el daño no se presume, de manera que quien alega su ocurrencia debe probarlo.”⁵

Sin embargo, revisados los hechos de la demanda y las pruebas aportadas por los Demandantes, emerge con toda claridad que los Demandantes no sufrieron, ni mucho menos acreditaron daño alguno que cumpla con la doble condición de ser cierto y directo.

Además, no se debe perder de vista que, en este caso, el daño supuestamente causado a los Demandantes no solo no es cierto y directo, sino que tampoco es antijurídico. En efecto, como se probará en este proceso, SIERRACOL, en cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos del Gobierno Nacional, adoptó todas las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios para evitar la propagación del Coronavirus, aplicándolos no solo a sus trabajadores, sino armonizados con los protocolos de bioseguridad de sus contratistas empleadores de personas que prestan sus servicios en campo, tales como Sodexo.

3.1. Inexistencia de Perjuicios materiales

Los Demandantes reclaman la configuración de perjuicios materiales de la siguiente manera:

PERJUICIOS MATERIALES:

El perjuicio material deberá ser liquidado, de acuerdo a la fórmula matemática, utilizada por el Honorable Consejo de Estado, y el resultado deberá ser traído al valor presente, teniendo en cuenta los valores tazados contablemente sobre:

1. Los muebles y enseres deteriorados por el actuar imprudente de la UAESA.
2. La afectación del good will e ingresos del señor Juan Álvarez.

Nuevamente, se advierte al Despacho que los Demandantes no aportan soporte alguno que permita corroborar la certeza de los daños materiales que alegan, de tal forma que se puedan apreciar material y jurídicamente. Por el contrario, parecen limitarse a meras conjeturas, hipótesis o eventualidades.

En efecto, es inexistente la prueba de la afectación al “good will” e ingresos del señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA, así como del deterioro de los muebles y enseres por el

⁴ Consejo de Estado. Sentencia del 14 de septiembre de 2017. CP: Ramiro Pazos Guerrero
⁵ Ibid.

supuesto actuar de la UAESA. En consecuencia, no existe daño alguno que pueda ser atribuible a mi mandante y que sea susceptible de ser reparado.

Además, como se abordará en el acápite del análisis del nexo de causalidad, los Demandantes tampoco acreditan que los daños que supuestamente se les causaron son directos y que, por lo tanto, guardan relación con alguna conducta antijurídica de mi mandante.

3.2. Sobre la inexistencia de “Perjuicios morales” y “Daño inmaterial por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparado”

En materia de perjuicios morales y/o daños inmateriales, los Demandantes pretenden el reconocimiento de las sumas que se detallan a continuación:

PERJUICIOS MORALES:

Pagar a cada uno de los demandantes el equivalente en pesos de las siguientes cantidades de salarios mínimos, certificados por el Banco de la República, a la fecha de ejecutoria de la conciliación:

Por la aflicción, el desconsuelo, la amargura, la desesperanza, la angustia, la desolación, el dolor, la pena y el padecimiento que tuvieron que pasar con el aislamiento de su señor padre y compañero permanente, **JUAN ALBERTO ÁLVAREZ QUEZADA**, así como la afectación al buen nombre de su medio económico de subsistencia.

Para **JUAN ALBERTO ÁLVAREZ QUEZADA** en calidad de víctima, de cuanto menos la suma de **cien (100)** salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para **JENIFER TINEO ROJAS**, en calidad de compañera permanente de la víctima, de cuanto menos la suma de **cien (100)** salarios mínimos legales vigentes.

Para **JUANA VICTORIA ÁLVAREZ TINEO y MARIANGEL MESA TINEO; y CRISTIAN CAMILO ÁLVAREZ FLÓREZ**, en calidad de hijos de la víctima, de cuanto menos la suma de **cien (100)** salarios mínimos legales vigentes, para cada uno de ellos.

DAÑO INMATERIAL POR AFECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS:

Para **JUAN ALBERTO ÁLVAREZ QUEZADA** en calidad de víctima, de cuanto menos la suma de **cien (100)** salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para **JENIFER TINEO ROJAS**, en calidad de compañera permanente de la víctima, de cuanto menos la suma de **cien (100)** salarios mínimos legales vigentes.

Para **JUANA VICTORIA ÁLVAREZ TINEO y MARIANGEL MESA TINEO; y CRISTIAN CAMILO ÁLVAREZ FLÓREZ**, en calidad de hijos de la víctima, de cuanto menos la suma de **cien (100)** salarios mínimos legales vigentes, para cada uno de ellos.

Sin embargo, de las anteriores pretensiones basta con advertirle al Despacho que los Demandantes no precisan ni en los hechos, ni en sus fundamentos de derecho, las bases ni las pruebas de los supuestos daños causados que motivan la solicitud de dicha indemnización, limitándose únicamente a aplicar los parámetros fijados por el Consejo de Estado en materia de perjuicios morales en procesos de reparación directa.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo dicho por el Consejo de Estado en materia de la prueba del perjuicio de daños morales, quien precisó lo siguiente:

“En cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado –al igual que demás perjuicios- a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, el Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la

ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso”.

Sin contrariar el principio que se deja visto, pero teniendo en cuenta las particularidades subjetivas que comporta este tipo de padecimientos que gravitan en la órbita interna de cada individuo, sin que necesariamente su existencia se corresponda con la exteriorización de su presencia, ha entendido esta Corporación que es posible presumirlos para el caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.

Idénticos parámetros jurisprudenciales maneja actualmente la Corte Suprema de Justicia que ha entendido que la valoración de este tipo de perjuicios corresponde al juez, quien podrá declarar su existencia con base en la prueba indiciaria, en la cual, el parentesco resulta ser un elemento que permite deducir y tener por demostrado el afecto derivado de las relaciones familiares”⁶

En concordancia con lo anterior, sobre los perjuicios por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

*“Sea lo primero manifestar que la jurisprudencia de esta Sección, siguiendo los lineamientos planteados en sus sentencias de unificación, se apartó de la tipología de perjuicio inmaterial denominada daño a la vida en relación y a la alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar reconocer la categoría de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, **que se reconocerá siempre y cuando su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos**. Ahora, en relación con la reparación a la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, en las referidas providencias de unificación se estableció que se privilegiaría la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero(a) permanente o estable y los parientes hasta el 1° de consanguinidad, en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos, las cuales operarían teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. Lo anterior, con el propósito de reconocer la dignidad de las víctimas, reprobando las violaciones a los derechos humanos y concretar las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición y las demás definidas por el derecho internacional”⁷*

En este sentido, es claro que la jurisprudencia prevé una presunción de la existencia de daño moral para los familiares más cercanos a la víctima directa de los hechos, lo cual, en principio, eximiría a dichas personas de probar la cuantía del daño moral. Sin embargo, este Despacho no puede perder de vista que los criterios establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para la tasación de perjuicios morales con base en los cinco niveles de cercanía afectiva a la víctima mencionados anteriormente aplican solamente para los casos de muerte de una persona, lo cual claramente no sucede en el caso que nos convoca pues el señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA no falleció.

En consecuencia, los Demandantes no se encuentran exentos de probar los elementos propios que constituyen el agravio moral cuya indemnización se pretende para que haya lugar a la indemnización de perjuicios en los términos fijados por el Consejo de Estado. Es más, al igual que sucede con los daños patrimoniales, los Demandantes no han individualizado, sustentado, ni probado los daños que reclaman. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso que nos convoca

⁶ Consejo de Estado. Sentencia del 23 de agosto de 2012. MP: Hernan Andrade Rincon.

⁷ Consejo de Estado. Sentencia del 29 de octubre de 2018. MP: Marta Nubia Velásquez.

no se observa que los Demandantes acreditaran los elementos propios que constituyen un perjuicio moral y/o la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, la prueba de la causación de los mismos, la calidad de “víctima” del señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA, ni su dependencia económica de la “víctima”, por lo que cualquier pretensión indemnizatoria por perjuicios morales está llamada al fracaso.

En efecto, como se mencionó anteriormente, de los hechos de la demanda y del material probatorio allegado no se aprecia que los perjuicios extrapatrimoniales reclamados por parte de los Demandantes sean ciertos y no totalmente hipotéticos, que su concreción se encuentre acreditada dentro del proceso, ni mucho menos que provengan de una conducta antijurídica atribuible a SIERRACOL.

3.3. Conclusión

En suma, en el presente caso deben desestimarse las pretensiones económicas de la demanda pues no existe prueba alguna que demuestre la efectiva causación de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales reclamados por los Demandantes. En consecuencia, tales pretensiones carecen del carácter indemnizable necesario para convertirse en condenas a cargo de la Demandada.

4. INEXISTENCIA DE TÍTULO DE IMPUTACIÓN

En línea con la defensa planteada en el numeral anterior, la acreditación del daño dentro de un juicio de responsabilidad reviste de una característica indispensable. Por lo tanto, sin su plena probanza o acreditación resultaría ilusoria cualquier pretensión resarcitoria a cargo de SIERRACOL.

No obstante, en el caso que nos convoca no solo no ha sido acreditado el daño reclamado. Tampoco se encuentra reunido el segundo elemento axiológico de la responsabilidad civil extracontractual: que la acción u omisión tenga un título jurídico de imputabilidad.

Así, en este caso no se observa que se esté ante ninguna de las modalidades de imputación establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado, a saber: (i) la responsabilidad objetiva, conocida como daño especial y riesgo excepcional y (ii) la responsabilidad subjetiva o falla de servicio. Es más, este Despacho no puede perder de vista que SIERRACOL no es una entidad del Estado sino una organización privada cuyo objeto principal es la explotación y producción de hidrocarburos, que no puede ser sujeto de estos títulos de imputación.

Sin embargo, si en gracia de discusión se admitiera que a las conductas de mi mandante se les puede inferir algún título de imputación jurídica, no podría tratarse de una imputación a título de daño especial y riesgo excepcional, pues no estamos ante un caso de desequilibrio de las cargas públicas.

Con respecto a la imputación subjetiva o falla del servicio, la jurisprudencia nacional ha reiterado que la misma se configura por retardo, irregularidad, ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo⁸:

⁸ Consejo de Estado. Sentencia del 7 de marzo de 2012.CP: Hernán Andrade Rincón

“El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía, en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como es lo esperado o lo normal, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan; y la ineficiencia se configura cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la Administración, teniendo el deber legal de prestar ese servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía⁹”.

En el caso que nos convoca no se observa que SIERRACOL tuviera un retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia en la prestación de sus servicios o en el desarrollo de sus actividades. Es más, los Demandantes tampoco han demostrado en debida forma la atribución de una responsabilidad objetiva a mi mandante, ni mucho menos que actuó de manera negligente en la prevención y aplicación de los protocolos de emergencia frente al Covid-19.

Por el contrario, como se demostrará a lo largo del proceso, y así lo acreditan las pruebas que se aportan con el presente escrito, SIERRACOL actuó en todo momento con diligencia y buena fe, en cumplimiento de las disposiciones legales, tomando las medidas necesarias para garantizar no solo un ambiente de trabajo seguro, sino también, para que no se propagara el virus del Covid-19.

Como se mencionó en el capítulo de la contestación de los hechos, y bien lo indican los Demandantes, en el marco de la pandemia causada por el Covid-19, el Gobierno Nacional ordenó, con la expedición del Decreto 457 del 2020, el aislamiento preventivo obligatorio a todos los habitantes del territorio nacional inicialmente desde el 25 de marzo de 2020, prorrogando su vigencia hasta el 1 de julio de 2020.

No obstante, tal como lo estableció el numeral 25 del artículo 3 del Decreto 457 de 2020, de la orden de aislamiento preventivo fueron exceptuadas ciertas actividades, entre ellas, las que correspondían y corresponden al objeto social de SIERRACOL, de la siguiente manera:

“26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la prestación de: (...) (ii) de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, gas licuado de petróleo -GLP- (...)”

En este sentido, SIERRACOL, en cumplimiento de las disposiciones legales que no solo le permitían, sino que la obligaban a mantener la continuidad de sus actividades, dada su naturaleza esencial de vital importancia para el país, adoptó los protocolos y medidas de bioseguridad necesarios para evitar el contagio y la propagación del del Covid-19, los cuales se fueron actualizando y mejorando a medida que los entornos regulatorios y circunstancias propias del virus iban cambiando. Además, estos protocolos fueron aplicados no solo a los trabajadores de SIERRACOL, sino que fueron armonizados y trabajados en conjunto con aquellos de las empresas contratistas y que fungían como empleadores de parte del personal que prestaba sus servicios en los campos petroleros.

En efecto, desde que en Colombia se decretaron las medidas extraordinarias en el mes de marzo de 2020, SIERRACOL se empeñó en construir, desarrollar e implementar los protocolos de

⁹ Ibid.

bioseguridad necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores y del personal que estuviera relacionado con los campos petroleros, tendientes a cumplir con toda la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en su momento y por las autoridades competentes, adelantando incluso iniciativas que excedían dichas normativas.

Dichos protocolos cubrían diferentes aspectos dentro de las actividades que se desarrollaban en las instalaciones de SIERRACOL; sin limitarse a las actividades propias de la operación dentro de los campos petroleros, sino incluyendo aspectos como el comportamiento cotidiano en los sitios de trabajo, el ingreso y permanencia en el área industrial, el cambio de turno, el manejo de casos sospechosos, el ingreso y salida desde y hacia los hogares de los trabajadores e incluso medidas de seguridad en el entorno personal de estos últimos al regresar a casa.

En ese orden de ideas, una de las medidas más importantes que implementó SIERRACOL desde mediados de abril de 2020, fue la realización de pruebas moleculares para detectar el virus del Covid-19 al 100% de los trabajadores y contratistas que pretendían ingresar a los campos petroleros de las operaciones de SIERRACOL en Arauca, pese a las limitaciones de disponibilidad de pruebas que existían en el territorio nacional. Es decir, prácticamente un mes antes de entrar en vigencia el Decreto 048 del 11 de mayo de 2020, expedido por la Gobernación de Arauca, SIERRACOL contrató el servicio para la realización de las pruebas Covid-19 en el Departamento de Arauca.

Además, teniendo en cuenta que para la época no era obligatorio que se realizaran las pruebas moleculares para la detección del Covid-19 en el lugar de origen del personal de SIERRACOL, las mismas fueron programadas y realizadas en el Departamento de Arauca y posteriormente remitidas a la ciudad de Bogotá para su procesamiento en el laboratorio Colcan, donde contaban con el equipo especializado para detectar el virus y emitir un resultado en el menor tiempo posible

La característica de las pruebas que realizaba SIERRACOL con el laboratorio Colcan era que, a diferencia de lo que ocurría en la gran mayoría de regiones del país, se practicaba a personas asintomáticas, lo que minimizaba significativamente la posibilidad de su contagio. Este aspecto es sumamente importante, no solo porque en su momento el Gobierno Nacional tenía un número limitado de pruebas moleculares disponibles para el país, únicamente llevando a cabo exámenes en personas con sintomatología, sino que los exámenes contratados por SIERRACOL eran mucho más rápidos por el volumen de muestras, contando con los resultados en un tiempo máximo de 72 horas.

Lo anterior evidencia que las acciones que adelantó SIERRACOL fueron más allá del simple cumplimiento de las normas, pues genuinamente buscaban el bienestar de sus trabajadores y contratistas. En efecto, como se mencionó anteriormente, SIERRACOL desde mediados de abril de 2020, prácticamente un mes antes del nacimiento de la obligación legal del Decreto 048 de 2020, adoptó la determinación de adelantar por su cuenta, con expertos y a sus expensas, las pruebas moleculares necesarias para la detección del Covid-19 en las personas que ingresarán al campo.

Así las cosas, dentro de los protocolos marco de mi mandante se estableció en el “Protocolo de Cambio de Turno” las medidas generales que debían cumplirse tanto por parte de los trabajadores de SIERRACOL, como por parte de los contratistas y sus trabajadores para el

ingreso y salida de turno en el campo petrolero. En dicho protocolo se consagró la aplicación de las pruebas de detección de Covid-19 a los trabajadores directos e indirectos que pretendían ingresar a las instalaciones de la operación de los campos petroleros.

El personal que iba a ingresar a turno era citado de manera previa en los respectivos laboratorios para la toma de las muestras, las cuales eran enviadas para su procesamiento a la ciudad de Bogotá en el laboratorio Colcan, permitiéndose el ingreso solamente de aquellas personas cuyo resultado fuera negativo. Para el caso particular de las operaciones en el campo petrolero Caño Limón, inicialmente las pruebas moleculares para la detección del virus del Covid-19 fueron programadas y realizadas para todos los trabajadores y contratistas en el Departamento de Arauca, en el laboratorio Bioanálisis.

Valga precisar que tanto los trabajadores de SIERRACOL, como los de los contratistas, hasta tanto no contaran con el resultado negativo que acreditara que no eran portadores del virus, no solo no podían ingresar a campo, sino que debían permanecer aislados como medida preventiva, para así velar por la seguridad del resto del personal y del público en general.

Sin embargo, aunque la persona contagiada a quien hacen referencia los Demandantes no es un trabajador directo de SIERRACOL, se debe precisar al Despacho que, de las averiguaciones que en su momento llevo a cabo mi mandante con SODEXO, se pudo conocer que su trabajador se desplazó hacia el municipio de Arauca en un vehículo particular, con las condiciones de asepsia y seguridad correspondientes, debiendo así cumplir con el protocolo de bioseguridad que para el efecto tenía adoptado su empleador.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace inconcebible el solo hecho de pensar que se le pueda endilgar responsabilidad alguna a SIERRACOL por los supuestos *“daños y perjuicios ocasionados por la falta de prevención e irregular aplicación de los protocolos de emergencia frente al Covid-19, así como la negligencia en la coordinación de actividades para la contención del mismo”*, cuando, por el contrario, SIERRACOL adoptó todas las medidas a su alcance para garantizar un ambiente de trabajo seguro y evitar el contagio y propagación del virus del Covid-19, incluso más allá de sus obligaciones y los lineamientos legales establecidos por el Gobierno Nacional.

Además, este Despacho no puede perder de vista que, dada la naturaleza de la crisis causada por la pandemia del Covid-19 en el mundo entero, SIERRACOL tuvo que adaptarse de la manera más rápida posible a las circunstancias desconocidas y cambiantes de la pandemia, actualizando y mejorando sus protocolos de seguridad a medida que el conocimiento sobre el virus aumentaba, e incluso teniendo en consideración las limitadas capacidades que tenía el sistema de salud nacional en su momento para realizar las pruebas moleculares para la detección del virus.

5. INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LA CONDUCTA Y EL DAÑO

Por último, y no menos importante, no existe un nexo de causalidad entre los presuntos daños reclamados por los Demandantes y conducta alguna de SIERRACOL. Reitero que los daños reclamados no fueron debidamente individualizados, sustentados, ni probados. La ausencia de este elemento axiológico de la responsabilidad extracontractual impide el éxito de las pretensiones de los Demandantes. En efecto, como se mencionó anteriormente, la

responsabilidad civil extracontractual como obligación que nace tras el surgimiento de un daño tiene tres elementos: el daño antijurídico, que la acción u omisión tenga un título de imputación y el nexo de causalidad entre la acción u omisión y el daño.

Para efectos de claridad, este nexo de causalidad hace referencia a la relación directa que debe acreditarse entre el daño que se reputa haberse causado y la acción u omisión en virtud de la cual se originó el daño alegado. En efecto, el daño sin causa no tiene relevancia jurídica ni carácter indemnizatorio, pues solo los adquiere en la medida en que se pueda determinar que es el efecto de un hecho antijurídico que lo antecedió.

Al respecto el Consejo de Estado, en sentencia del 11 de febrero de 2009 señaló lo siguiente:

“la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada”

En concordancia con lo anterior, en sentencia del 9 de junio de 2010, la misma corporación precisó que:

“no está llamado a resarcir un daño aquel que no ha contribuido a su realización, de manera que siempre debe existir un ligamen entre el daño causado y el hecho que se atribuye a quien debe responder. Esa relación necesaria se ha denominado nexo causal y se ubica como un elemento imprescindible que debe ser acreditado en todos los casos para efectos de estructurar la responsabilidad, sin importar la noción jurídica a través de la cual se pretenda constituir la, es decir, el nexo causal requiere ser acreditado tanto en los regímenes de responsabilidad objetiva como en el de responsabilidad subjetiva...”

Por lo tanto, el nexo causal resulta en una relación estrecha e inescindible que obedece a la necesidad de una causa única y exclusiva a la cual se imputa el daño cuya reparación se pide. En este caso, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, los Demandantes tienen la carga de probar una relación de causalidad directa entre una conducta antijurídica de SIERRACOL y los daños reclamados, lo cual hasta el momento no ha ocurrido y no va a ocurrir, dado que no existe conducta alguna de SIERRACOL que sea imputable a los supuestos daños que acá se reclaman.

Así las cosas, corresponde a los Demandantes demostrar que los supuestos daños que dicen se les causaron, tanto los materiales como inmateriales, además de ser ciertos y directos, provienen de una conducta – acción u omisión - directamente atribuible a SIERRACOL. Sin embargo, de acuerdo con los elementos de convicción aportados al proceso y con la narración de los hechos de los actores, no solo no es clara cuál es la conducta de SIERRACOL que supuestamente causó los daños a los Demandantes, sino que, en esa misma lógica, tampoco es posible determinar el eventual nexo de causalidad entre todas las conductas que alegan los Demandantes como productoras del daño.

Reiterando lo dicho en las excepciones anteriores, el desarrollo de las actividades de mi mandante, que se encontraban exceptuadas de la medida de aislamiento preventivo decretada por el Gobierno Nacional, se ciñó a todos los protocolos de bioseguridad y disposiciones legales, no existiendo omisiones que dieran lugar a los daños.

Por lo tanto, no puede predicarse que alguna de las conductas endilgadas a SIERRACOL esté ligada directamente a la producción de los supuestos daños, por cuanto, muy por el contrario, el actuar de mi mandante tuvo como objeto el velar por la seguridad y bienestar de sus trabajadores teniendo la máxima diligencia para dicho efecto.

Consecuentemente, al no concurrir y no encontrarse plenamente acreditados los elementos axiológicos del presente juicio de reparación directa, las pretensiones incoadas por la parte actora están inexorablemente llamadas al fracaso.

6. HECHO DE UN TERCERO COMO EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD

En cualquier caso, en el remoto evento que este Despacho considere que se encuentran reunidos los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, y que las pretensiones de los Demandantes deberían prosperar, el Despacho deberá declarar la existencia de un hecho imputable exclusivamente a un tercero, por lo que deberá declarar el eximente de responsabilidad a favor de SIERRACOL.

Sobre esta causal eximente de responsabilidad el Consejo de Estado indicó que:

“El hecho de un tercero como eximente de responsabilidad supone para su estructuración que la acción u omisión del tercero sea ajena a la entidad (su actuación no esté vinculada de ninguna forma al servicio a cargo de la esta), constituya la causa exclusiva y determinante del daño y se trate de un hecho imprevisible e irresistible para la demandada. Esto implica que la entidad no haya tenido la posibilidad de evitarlo mediante el ejercicio de sus facultades y deberes”¹⁰

De igual forma, al respecto la doctrina nacional ha precisado lo siguiente:

“Tradicionalmente se ha considerado que cuando el hecho por el cual se demanda es imputable exclusivamente a un tercero, el demandado debe ser absuelto porque, desde el punto de vista jurídico, no es él quien ha causado daño. Así, considerado, el hecho de un tercero es un especie de causa extraña, e inclusive, puede tenerse como una de las especies de fuerza mayor.”

En este caso, se advierte al Despacho que los supuestos daños que reclaman los Demandantes no fueron producto de una acción u omisión de SIERRACOL. Por el contrario, y de acuerdo con las manifestaciones contenidas en los hechos de la demanda, los supuestos daños reclamados, de existir, fueron producto de las acciones y omisiones de terceros completamente ajenos a SIERRACOL.

En efecto, por un lado, los daños que dicen los Demandantes se les causaron a los muebles y enseres del señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA, no fueron producto de un acto llevado a cabo por SIERRACOL, pues SIERRACOL en ningún momento realizó actividades de fumigación y desinfección en las instalaciones del Hotel Cima Real.

¹⁰ Consejo de Estado. Sentencia del 15 de marzo de 2018.CP: Carlos Alberto Zambrano.

Por el contrario, fue la UAESA quien tomó la decisión de fumigar con antivirales las áreas del Hotel Cima Real, como medida de bioseguridad para evitar la propagación del Covid-19, luego de que uno de los trabajadores de SODEXO fuera reportado como caso positivo del virus. Por lo tanto, ninguna responsabilidad puede atribuírsele a mi mandante por la producción de los daños en los muebles y enseres del Hotel Cima Real que fueron causados por la fumigación realizada por un tercero.

Lo anterior, tal y como los mismos Demandantes lo indican en el subcapítulo de la “PRETENSION SEGUNDA” denominado “PERJUICIOS MATERIALES”, en donde señalan que el deterioro en los muebles y enseres fue causado por el actuar imprudente de la UAESA así:

PERJUICIOS MATERIALES:

El perjuicio material deberá ser liquidado, de acuerdo a la fórmula matemática, utilizada por el Honorable Consejo de Estado, y el resultado deberá ser traído al valor presente, teniendo en cuenta los valores tazados contablemente sobre:

1. Los muebles y enseres deteriorados por el actuar imprudente de la UAESA.
2. La afectación del good will e ingresos del señor Juan Álvarez.

Asimismo, en el hecho DECIMO SEGUNDO los Demandantes hacen referencia expresa a los causantes de los supuestos daños y confiesan que la UAESA fue quien fumigó las áreas del hotel, confesando lo siguiente:

DÉCIMO SEGUNDO: el cumplimiento de la prestación del servicio de hospedaje, solo trajo daños y perjuicios al señor Juan Álvarez, a quien le dañaron muebles y enseres con la fumigación indiscriminada de las áreas de su hotel por parte de la UAESA, así como insultos y amenazas por parte de la comunidad, tal y como se deja ver en las fotografías y videos anexos.

De igual forma sucede con respecto a los insultos y amenazas que supuestamente sufrió el señor JUAN ALBERTO ALVARÉZ, pues los mismos no fueron producto de una conducta atribuible a SIERRACOL ni fueron efectuados por SIERRACOL; es más, en el mismo hecho “DECIMO SEGUNDO”, los Demandantes señalan que fue la “comunidad” quien realizó dichas actuaciones. Además, a SIERRACOL no le consta el alcance de los insultos y amenazas, pues esto no fue especificado en los hechos de la demanda y los Demandantes tampoco aportan pruebas suficientes que acrediten sus afirmaciones.

En consecuencia, se encuentra nuevamente acreditado el rompimiento del nexo causal entre los supuestos daños causados a los Demandantes y una conducta antijurídica atribuible a mis mandantes, pues en este caso es un tercero el que está llamado a responder por los daños reclamados.

7. CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Aunado a lo anterior, en el caso que nos convoca, también se encuentra configurada la culpa exclusiva de la víctima como otro factor eximente de responsabilidad civil extracontractual, la cual ha sido considerada por la jurisprudencia y doctrina nacional como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que resultó suficiente para causar el daño.

Esta causal eximente de responsabilidad ha sido desarrollada por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:

“La víctima, en suma, es exclusivamente culpable de su propio infortunio cuando su conducta (activa u omisiva) es valorada como el factor jurídicamente relevante entre todas las demás condiciones que confluyeron en la realización del perjuicio; es decir que aunque pueda presentarse una concurrencia de causas en el plano natural –dentro de las cuales se encuentra la intervención del demandado, así sea de modo pasivo–, la actuación de aquélla es la única que posee trascendencia para el derecho, o sea que su culpa resta toda importancia a los demás hechos o actos que tuvieron injerencia en la producción de la consecuencia lesiva.”

En el presente caso, se advierte que precisamente las conductas y/o las omisiones de los Demandantes, puntualmente del señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA como representante legal del Hotel Cima Real, fueron las que resultaron determinantes para la concreción de los supuestos daños que reclaman los Demandantes.

En efecto, los Demandantes no han acreditado en debida forma que en el Hotel Cima Real desarrollaran o implementaran los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar el contagio y la propagación del virus del Covid-19 entre las personas que allí se alojaran, de conformidad con las regulaciones que al respecto expidieron el Gobierno Nacional y las diversas autoridades nacionales, tales como los Decretos 457 y 749 de 2020, las Resoluciones 380,285 y 666 de 2020, la Circular 022 de 2020, entre otros.

Es decir: eran los mismos Demandantes quienes estaban obligados a cumplir con las normas expedidas por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria y los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para el manejo del aislamiento preventivo en hoteles, hostales u hospedajes. Sin embargo, al no haber aportado prueba alguna de que en el Hotel Cima Real se aplicaron todas las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio y la propagación del Covid-19, se pone en tela de juicio su diligencia y en consecuencia la verdadera causa de los daños que alegan.

8. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se advierte que SIERRACOL carece de legitimación en la causa por pasiva dentro del proceso de reparación directa de la referencia pues ninguna de sus acciones u omisiones causaron los daños supuestamente causados a los Demandantes, por lo que no es el sujeto llamado a responder.

En relación con la legitimación en la causa, la jurisprudencia y doctrina nacional la han definido de la siguiente manera:

“La legitimación en la causa -legitimatío ad causam- se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el

supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal¹¹”

De lo anterior se colige que la legitimación en la causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios e imprescindibles para que se pueda dictar decisión de fondo dentro de un proceso judicial¹².

En efecto, la sentencia estimatoria de las pretensiones de una demanda supone el cumplimiento de ciertos presupuestos sustanciales, entre ellos la legitimación en la causa, entendida ésta como la aptitud tanto del demandante, para reclamar el derecho que persigue judicialmente y, por lo tanto, de ser titular del interés jurídico que se debate en el proceso (legitimación por activa), como la del demandado de ser el sujeto llamado a responder por el derecho o interés que es objeto de controversia, a partir de una relación jurídica sustancial o un nexo de causalidad (legitimación por pasiva).

Una y otra condición deben estar plenamente acreditadas en el proceso, pues de lo contrario el juez no podría acceder a lo pedido por quien no está legitimado para ello y tampoco frente a quien no esté llamado a soportar dichas pretensiones.

Ahora bien, aterrizado al caso que nos convoca, el artículo 140 del CPACA establece los presupuestos de procedibilidad del medio de control de reparación directa de la siguiente forma:

“En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma”

De esta disposición es claro que, en ejercicio del medio de control de reparación directa, está legitimado por activa para interponer la demanda aquel que demuestre su condición de perjudicado con la acción u omisión que produjo el daño, cuya indemnización se reclama y se encuentra legitimado por pasiva aquel sujeto que por sus acciones u omisiones está llamado a responder por los daños causados al demandante.¹³

Teniendo en cuenta lo anterior, de la lectura de los hechos narrados en la demanda de la referencia y el material aprobatorio aportado, se advierte al Despacho que SIERRACOL carece de legitimación en la causa por pasiva pues, al no encontrarse probada la existencia de un nexo causal entre sus acciones u omisiones y los supuestos daños causados a los Demandantes¹⁴, no es el sujeto llamado a responder. En efecto, tal como lo ha reiterado el Consejo de Estado:

“La calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación¹⁵”

¹¹ Consejo de Estado. Sentencia del 23 de abril de 2008. MP: Ruth Stella Correa Palacios

¹² Consejo de Estado. Sentencia del 26 de septiembre de 2012. MP:

¹³ Consejo de Estado. Sentencia del 17 de septiembre de 2018. CP: Jaime Enrique Rodríguez

¹⁴ Al respecto el Consejo de Estado en Sentencia del 9 de agosto de 2012 precisó que: “La calidad que tiene una persona para formular o contradecir las pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial, por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha relación”

¹⁵ Consejo de Estado. Sentencia del 9 de agosto de 2012. CP: Marco Antonio Velilla Moreno.

Es más, este Despacho no puede perder de vista que los supuestos daños que reclaman los Demandantes no fueron producto de una acción u omisión de SIERRACOL, sino por el contrario, fueron producto de las conductas de terceros completamente ajenos a mi mandante, los cuales deben ser los llamados a responder en este proceso.

En efecto, como se mencionó anteriormente y fue confesado por los mismos Demandantes en los hechos de la demanda, fue la UAESA quien decidió fumigar las áreas del Hotel Cima Real, causando los supuestos daños en los muebles y enseres del señor JUAN ALBERTO ALVAREZ y la comunidad del Departamento de Arauca quien insultó y amenazó al señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA.

Así las cosas, es claro que SIERRACOL no es el sujeto llamado a responder por los derechos o intereses que son objeto de esta controversia, pues bajo ninguna circunstancia sus acciones u omisiones causaron los daños que reclaman los Demandantes. Por el contrario, y así se encuentra demostrado en esta temprana etapa del proceso, SIERRACOL actuó en todo momento con diligencia y buena fe, en cumplimiento de las disposiciones legales, tomando las medidas necesarias para garantizar no solo un ambiente de trabajo seguro, sino que no se propagara el virus del Covid-19.

En consecuencia, como SIERRACOL carece totalmente de legitimación en la causa por pasiva dentro de la acción de reparación directa de la referencia, al encontrarse probada no solo por las circunstancias fácticas y jurídicas, sino por la afirmaciones hechas por los Demandantes en la demanda, las cuales solicito amablemente que se les de alcance de confesión en este proceso, este Despacho deberá dictar sentencia anticipada absolutoria respecto de SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y la solicitud que se presenta junto con este escrito.

9. GENÉRICA

Solicito al Despacho declarar cualquier excepción de mérito que encuentre probada durante el proceso.

IV. PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas las siguientes que relaciono a continuación:

A. DOCUMENTALES

- 1. Protocolo de prevención Covid-19 en la operación LLN (V2.0)
- 2. Protocolo de cambio de turno en los llanos norte periodo de cuarentena Covid-19
- 3. Protocolo de Transporte de Oxy en la Emergencia Sanitaria
- 4. Comunicación de Occidental Colombia al Gobernador de Arauca del 11 de mayo de 2020.
- 5. Anexo para carta al Gobernador de Arauca, denominado “Anexo Plan de Operación y Respuesta por Coronavirus Covid-19”
- 6. Comunicado de prensa de Sodexo S.A
- 7. Contestación de Occidental Colombia, LLC a la Acción de Tutela No. 2020-069
- 8. Cadena de correos electrónicos denominada “CONTESTACIÓN OXYCOL TUTELA 2020-00069 (4)”

- 9. Documento de excel denominado “Copy of MONITOREO MAYO 9 P.M”
- 10. Copia del Contrato No.CW2234430 suscrito entre Occidental Colombia, LLC y Sodexo S.A.S
- 11. Copia del Decreto 448 de 2020
- 12. Cadena de correos electrónicos denominada “Información de Interés Segunda prueba de laboratorio descarta Covid-19 en empleado de firma contratista de Caño Limón”
- 13. Memorial respuesta Juzgado Arauca por tutela Covid19
- 14. Noticia denominada “Nuevo caso de Coronavirus en Arauca capital. Se trata de un bebé de 6 meses”
- 15. Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 8001482976 de Axe Colpatria Seguros S.A
- 16. Cadena de correos electrónicos denominada “RE CONTESTACIÓN OXYCOL TUTELA 2020-00069 (2)”
- 17. Cadena de correos electrónicos denominada “RE URGENTE OFICIO JLCA-970 NOTIFICACIÓN ACCION DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA (4)”
- 18. Acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Alberto Guerrero
- 19. Sentencia en primera instancia del 26 de mayo de 2020 del Juzgado Laboral Del Circuito de Arauca
- 20. Copia de la Resolución 666 de 2020
- 21. Réplica de Occidental de Colombia LLC a la impugnación del fallo de tutela
- 22. Anexos de Occidental de Colombia LLC a la réplica de la impugnación del fallo de tutela
- 23. Sentencia en segunda instancia del 18 de septiembre de 2020 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca
- 24. Certificación expedida por SIERRACOL de los contratos vigentes con el Hotel Cima Real
- 25. Certificado expedida por SIERRACOL de la relación laboral con el señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA

B. EXHIBICION DE DOCUMENTOS

En los términos del artículo 265 y 266 del Código General del Proceso, solicito amablemente a este Despacho que decrete como prueba la exhibición de los documentos que indico a continuación, lo cuales se encuentran en poder de los Demandantes:

- i) Copia del contrato suscrito entre el señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA, como representante legal del Hotel Cima Real y la compañía SODEXO S.A, al que hacen referencia los Demandantes en el hecho “NOVENO”.
- ii) Copia del registro de la ocupación de huéspedes que tuvo el Hotel Cima Real durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.
- iii) Copia de los protocolos de seguridad desarrollados e implementados en el Hotel Cima Real durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.
- iv) Copia de la autorización que tenía el Hotel Cima Real para prestar el servicio de aislamiento preventivo de sus huéspedes durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.

En atención a lo previsto en el inciso primero del artículo 256 del CGP, manifiesto que con la exhibición pretendo probar que:

- i) Existió una relación contractual alguna entre el señor JUAN ALBERTO ALVAREZ QUEZADA, como representante legal del Hotel Cima Real, y la compañía SODEXO S.A.
- ii) Durante la época de los hechos el Hotel Cima Real tenía una alta ocupación de huéspedes, percibiendo un nivel considerable de ingresos en un momento en el cual la industria hotelera se había visto gravemente afectada por la pandemia causada por el Covid-19 y las medidas tomadas por el Gobierno Nacional. Es decir, que los Demandantes se vieron beneficiados económicamente por el servicio de alojamiento que prestaron a los trabajadores de SODEXO, pese a que en la mayoría del país los hoteles tuvieron que cerrar y/o suspender sus servicios.
- iii) La diligencia del Hotel Cima Real en el desarrollo e implementación de protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación y el contagio del Covid-19 en sus instalaciones, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020-
- iv) Contrario a lo argumentado por los Demandantes, el Hotel Cima Real prestó sus servicios de hospedaje para el aislamiento preventivo de sus huéspedes durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, sin contar con las debidas autorizaciones.

C. TESTIMONIALES

Solicito al Despacho decretar el testimonio de las personas relacionadas a continuación, todas mayores de edad, domiciliadas en los lugares que para cada una de ellas indico, a quienes citará para que comparezcan ante el Despacho y declaren sobre los hechos del proceso, a saber:

- 1. **JOSE FERNANDO CRISTANCHO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.19447180, domiciliado en Bogotá, quien para mayo de 2020 se desempeñaba como asesor medico de salud ocupacional e higiene industrial de SIERRACOL. El testigo declarará sobre lo que le conste acerca de la elaboración e implementación de los protocolos de bioseguridad, incluyendo las pruebas PCR y consejería en temas generales de salud relacionadas con el COVID para los campos de SierraCol en Arauca.

En cumplimiento de lo previsto en la ley 2213 de 2022, manifiesto al Despacho que el testigo puede ser citado en el correo electrónico: jose.fernando.cristancho@sierracol.com

- 2. **ALBERTO AYA QUEVEDO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.80058659, domiciliado en Bogotá, quien para mayo de 2020 se desempeñaba como supervisor de recursos humanos de SIERRACOL en el campo Caño Limón. El testigo declarará sobre lo que le conste acerca de la aplicación y logística asociada a los protocolos de ingreso y salida a los campos de SIERRACOL en ARAUCA, en virtud del desarrollo de sus funciones.

En cumplimiento de lo previsto en la ley 2213 de 2022, manifiesto al Despacho que el testigo puede ser citado en el correo electrónico: alberto_aya@sierracol.com

3. **RAFAEL LEONARDO GARCIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.88.030.279, domiciliado en Duitama, Boyacá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como gerente de contrato Sodexo Cano limón – Caricare. El testigo declarará sobre los hechos que le consten con relación a las funciones propias de su cargo.

En cumplimiento de lo previsto en la ley 2213 de 2022, manifiesto al Despacho que el testigo puede ser citado en el correo electrónico: rafaelleonardo_garcia@sierracol.com

D. INTERROGATORIO DE PARTE

Con fundamento en lo previsto en el artículo 198 del Código General del Proceso, solicito al Despacho fijar fecha y hora para que los Demandantes absuelvan el interrogatorio de parte sobre las preguntas que personalmente le formularé en la audiencia señalada por el Despacho. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de allegar el cuestionario en sobre cerrado para el efecto.

E. DECLARACIÓN DE PARTE

En los términos del inciso final del Artículo 191 del Código General del Proceso, en virtud del cual “[l]a simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas”, solicito al despacho decretar y practicar la declaración del Representante Legal de SIERRACOL sobre los hechos del proceso.

V. OPOSICIÓN A LA ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA

Los Demandantes en su demanda incluyeron un capítulo denominado “ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA” en el cual indicaron lo siguiente:

Estimo la cuantía, a la fecha de la presentación de este medio de control en **SEISCIENTOS (600) SMLMV**, por la siguiente razón:

Porque la única pretensión tasada a la fecha es la que reclama perjuicios morales.

Al respecto, se pone de presente a este Despacho que los Demandante no hicieron una estimación razonada de la cuantía, pues simplemente sumaron unos valores de los perjuicios deprecados, que no tienen sustento fáctico y probatorio alguno, y que conforme lo establecido en artículo 157 del CPACA estos no deben sumarse.

VI. NOTIFICACIONES

SIERRACOL recibirá notificaciones en el correo de Notificaciones Judiciales: bogota-notificaciones-judiciales@sierracol.com

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en los correos electrónicos jotero@gomezpinzon.com, daraque@gomezpinzon.com, jromero@gomezpinzon.com y jcdiaz@gomezpinzon.com

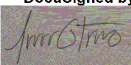
VII. ANEXOS

Anexo a la presente contestación los siguientes documentos:

- 1. Poder otorgado por SIERRACOL al abogado DAVID RICARDO ARAQUE QUIJANO.
- 2. Correo electrónico de remisión de otorgamiento de poder
- 3. Sustitución de poder de DAVID RICARDO ARAQUE QUIJANO al suscrito.
- 4. Certificado de Existencia y Representación de SIERRACOL.
- 5. Las pruebas documentales relacionadas en el acápite de pruebas

En el siguiente link se encuentran las pruebas documentales anunciadas: [Pruebas contestación de la demanda](#)

Atentamente,

DocuSigned by:

7AC27350505B41F...

JUAN GUILLERMO OTERO GONZÁLEZ

C.C. 91.498.599 de Bogotá

T.P. No. 115.715 del C. S. de la J

Señores

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE ARAUCA

Al correo electrónico: j2adarau@cendoj.ramajudicial.gov.co

Referencia: Acción de Reparación directa de **JUAN ALBERTO ÁLVAREZ QUEZADA y OTROS** contra **UAESA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, OCCIDENTAL DE COLOMBIA (SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC) Y SODEXO S.A**

Radicado: 81-001-3333-002-2022-00527-00

Asunto: Sustitución de poder

DAVID RICARDO ARAQUE QUIJANO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.038.372 de Bogotá D.C. y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No.157.263 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados daraque@gomezpinzon.com, actuando en mi calidad de apoderado especial de **SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC.**, dentro del procedimiento de la referencia, **SUSTITUYO** el poder que me fue conferido por mi poderdante en favor de **JUAN GUILLERMO OTERO GONZÁLEZ** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.498.599 de Bogotá, abogado portador de la Tarjeta Profesional No. 115.715 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico registrado en el Registro Nacional de Abogados jotero@gomezpinzon.com para que actúe y represente **SIERRACOL ENERGY ARAUCA, LLC.**, en el proceso contencioso-administrativo de la referencia.

El Apoderado queda investido de las mismas facultades que me fueron conferidas por mi poderdante, así como aquellas contempladas en el artículo 74 del Código General del Proceso, estando expresamente autorizado para recibir notificaciones, documentos, aceptar, desistir, transigir, conciliar, sustituir y reasumir el presente poder, tachar documentos de falsos, otorgar cauciones para impedir o cancelar medidas cautelares, y, en general, para ejecutar todos aquellos actos que sean necesarios para el cabal cumplimiento del presente mandato.

Atentamente,


Acepto,



DAVID RICARDO ARAQUE QUIJANO

C.C. No. 80.038.372 de Bogotá

T.P. No. 157.263 del C. S. de la J.

DocuSigned by:

7AC27350505B41F...

JUAN GUILLERMO OTERO GONZÁLEZ

C.C. No. 91.498.599 de Bucaramanga

T.P. No. 115.715 del C.S. de la J.